

cuenta con las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia. Definitivamente juzgando lo decretó el C. juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fé.—*Gabino Ortiz*.—Una rúbrica.—*Anto mí*.—*Isidro Aleman*.—Una rúbrica.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Michoacan, por el C. Juan José Gil, contra los procedimientos del alcalde 1º del ayuntamiento de Coeneo que hizo efectivo un acuerdo de la corporacion municipal de ese pueblo, por el cual se mandaba ocupar la propiedad del quejoso sin los requisitos constitucionales, para el alineamiento de una calle principal, haciendo extensiva su queja contra el referido alcalde por haberle impuesto tres dias de prision; alegando que se han violado en su persona con dichas providencias, las garantías que otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitucion federal de la República.

Vistas las constancias de autos: y

Considerando: en cuanto al primer punto, que la expropiacion del terreno se ha hecho contra la voluntad del promovente y sin la previa indemnizacion; como consta del mismo informe rendido por la autoridad ejecutora del acto; y en cuanto al segundo, que habiendo cesado el acto, y comprobada la violacion de garantías, no es ya motivo de juicio de amparo sino para el efecto de la responsabilidad. Con fundamento de los artículos 16 y 27 de la Constitucion general de la República se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Morelia, en 19 de Setiembre de este año, cuya parte resolutive declara:

Primero; la justicia de la Union ampara y protege al C. Juan José Gil, contra el C. Francisco Ramos, presidente del ayuntamiento de Coeneo, por haber violado éste en la persona de aquel, las garantías que al hombre otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitucion general.

Segundo; restitúyanse las cosas al estado que guardaban antes de la violacion á costa del responsable; dejando á salvo los derechos del quejoso por daños y perjuicios, para que los haga valer como y cuando le convenga.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada*.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*J. M. Lafragua*.—*M. Auza*.—*S. Guzman*.—*L. Velazquez*.—*M. Zavala*.—*José García Ramirez*.—*Luis M^a Aguilar*, secretario.

Son copias México, Octubre dos de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustin Peralta* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de San Luis Potosí por el Lic. D. Ignacio Arriaga, como apoderado de los Sres. Farias hermano, contra un acuerdo de la II. legislatura del Estado, que cree viola las garantías que otorga el art. 14 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El jefe de hacienda en el Estado, llevando la voz fiscal por excusa del Promotor,

on el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Ignacio Arriaga á nombre de la sociedad Farias y hermano, dice: que dicho C. licenciado se queja de violacion, en la sociedad de su poderdante, del art. 14 de la Constitucion federal, con motivo del cobro que se le hace de la suma de cinco mil pesos, importe de los derechos causados por traslacion de dominio, con motivo de la compra que hizo dicha sociedad de la hacienda de Bocas.

El solicitante acompaña varios documentos, en los que pretende apoyar su pedido, deduciendo de ellos; que al exigirse la suma en cuestion á virtud de dos acuerdos económicos de la II. legislatura de este Estado, se ha expedido una ley retroactiva, puesto que por resolución del gobierno del mismo de 31 de Marzo del año próximo pasado se declaró, que la compra de dicha hacienda estaba comprendida en la exención que marca en su art. 2º frac. 1ª el decreto núm. 93 de 13 de Julio de 1868. El ministerio público cree, que no hay tal violacion, pues que el artículo que se asegura infringido dice: "No se expedirá ninguna ley retroactiva;" y es claro que ni las resoluciones del ejecutivo, cuando como en el caso solo se trata de la aplicacion de una ley, ni los acuerdos son leyes, sin que pueda tenerse en consideracion lo que asienta el solicitante de que siendo de mayor efecto las leyes, es evidente que se trata de acuerdos, pues que con tal doctrina se destruiria el principio de que "donde la ley no distingue, no debemos distinguir."

Por tales razones, el ministerio público es de opinion, que ese juzgado declare que no procede el amparo, puesto que no hay la violacion de la garantía que se cita.

Este es mi parecer que sujeto al mas ilustrado de vd.

San Luis Potosí, Setiembre ocho de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado).—*Carlos E. Margain.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Luis Potosí, Setiembre veinte de mil ochocientos setenta y uno.

Visto: el juicio de amparo promovido por el Lic. D. Ignacio Arriaga, como apoderado de los Sres. Farias hermano, por creer que se ha violado la garantía que concede el art. 14 de la Constitucion general de la República, con el acuerdo de la H. Legislatura, en el que mandó que se pagara el derecho de alcabala, causado por la venta que se hizo de la hacienda de Bocas; las constancias presentadas por el C. administrador principal de rentas del Estado, al rendir el informe que se le pidió, así como las que acompañó la parte actora y el parecer del C. Promotor fiscal.

Considerando: que habiendo comprado los poderdantes del Sr. Lic. Arriaga, lo que este llama el casco de la hacienda de Bocas, despues de sancionado el decreto núm. 93 que declaró subsistente en el Estado el derecho de traslacion de dominio, creyendo que esa enagenacion era de las que en la fraccion primera del art. 2º de dicho decreto estaba exceptuada del mencionado pago, ocurrió á la H. Legislatura y luego al ejecutivo para que así lo declararan; que antes que el primero de dichos poderes resolviera, el C. gobernador, en uso de las facultades extraordinarias que se le habian concedido, dispuso: que la venta de la hacienda de Bocas hecha á los Sres. Farias, no causaba el derecho de traslacion de dominio.

Considerando: que aunque en virtud de este acuerdo se dió al comprador el testimonio de la escritura, no por esto puede sostenerse que habia adquirido un derecho para que no se le exijiera el pago, pues debia tener presente, que dictada la resolucion por el gobierno, en virtud de las facultades extraordinarias que se le habian concedido, á la Legislatura, que era á quien debia dar cuenta el ejecutivo, correspondia aprobar ó desaprobar el uso que de ellas hubiera hecho.

Considerando: que al dictarse el acuerdo económico con el que el apoderado de los Sres. Farias cree que se ha violado la garantía que otorga el art. 14 de la Constitución general, no se hizo mas que desaprobar el uso que de dichas facultades habia hecho el C. gobernador, y mandar, en consecuencia, que se cobrara el derecho de traslación de dominio que habia causado la venta de la hacienda de Bocas, sin que haya documento alguno por donde pueda inferirse que se mandó aplicar el decreto núm. 84, como parece pretende el Sr. Lic. Arriaga, y es el caso en donde podria decirse que se habia hecho tal aplicacion con efecto retroactivo.

Considerando: que de que la Legislatura no haya aprobado el uso de las facultades extraordinarias y haya declarado que la repetida venta de la hacienda de Bocas, no estaba comprendida en las exenciones del art. 2º del decreto núm. 93, no es posible inferir que se aplicó una ley con efecto retroactivo, pues ni siquiera se cita cuál es la que ha tenido tal efecto.

Considerando: que no son de tomarse en consideracion las razones que se ameritan para demostrar que hubo fraccionamiento, porque esto á nada conduce para aclarar si fué ó no violada la garantía que concede el referido art. 14 de la Constitución general. De conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal.

Fallo:

Primero: la justicia de la Union no protege ni ampara á los Sres. D. Francisco de P. Farias y hermano contra el acuerdo de la H. Legislatura del Estado, en que mandó que pagaran el derecho de traslación de dominio, por no considerar comprendida en las exenciones del decreto núm. 93, la compra que hicieron de la hacienda de Bocas.

Segundo: conforme al art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se impone á di-

chos Sres. Farias el minimum de la multa que señala el citado artículo.

Tercero: notifíquese, publíquese en el periódico oficial del Estado, mándese copia al "Semanario Judicial" con el mismo objeto, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia.

El C. Lic. Cipriano J. Martínez juez de Distrito del Estado, lo mandó y firmó.—Damos fé.—Lic. Cipriano J. Martínez, rubricado.—A.—Vicente Exiga.—A.—Rafael Guzman.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre tres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 31 de Agosto de este año, promovió ante el juez de Distrito del Estado de San Luis Potosí, el C. Lic. Ignacio Arriaga como apoderado de los señores Farias y hermano, alegando: que el gobierno del Estado expidió el decreto núm. 93, fecha 13 de Julio de 1868, por el que se dispone que en el territorio de aquella demarcacion subsista el derecho de traslación de dominio sobre el valor de las fincas rústicas, exceptuándose las que se fraccionen para enagenarlas á diversas personas: que al amparo de esa ley, los representados del promovente proyectaron comprar á D. Miguel Rul el casco de la antigua hacienda de Bocas intentando un verdadero fraccionamiento: que ocurrieron al C. gobernador Sóstenes Escandon, pidiéndole que resolviera que la venta estaba comprendida en la exencion de la ley citada, y que esta autoridad resolvió de conformidad: que bajo la fé y seguridad de esa resolucio, se otorgó la escritura de venta procediéndose en seguida á la tradicion de la cosa vendida y quedó consumado el contrato: que dos meses despues se expidió un decreto con el núm. 84 y fecha 1º de Junio de 1870, mandando que la exencion de

que habla el decreto núm. 93 y sus concordantes, por ventas hechas en fraccionamiento de fincas rústicas, se entiende sobre pequeñas enagenaciones cuyo valor no exceda de tres mil pesos, y que en las demás enagenaciones se causa el derecho de traslación de dominio: que sin embargo de que esta ley no podía aplicarse á la enagenación perfectamente concluida y consumada del casco de la hacienda de Bocas, la Legislatura de San Luis Potosí en acuerdo de 10 de Diciembre del mismo año de 1870, dispuso que se cobrara el derecho de traslación de dominio por esa enagenación, cuya resolución se comunicó al administrador principal de rentas de aquella ciudad: que habiendo los señores Farías y hermano procurado ante las autoridades la insubsistencia de ese acuerdo, y habiéndose decidido últimamente por la legislatura que se cumpliera, el promovente ocurre en queja, manifestando que se viola en las personas de sus representados la garantía que otorga el art. 14 de la Constitución federal, porque se les aplica con el decreto núm. 34 una ley retroactiva, y pide se les ampare contra el cobro que les ha hecho el administrador principal de rentas como ejecutor, restituyéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación de la Constitución. Visto el informe del administrador de rentas de San Luis Potosí, conformándose con los hechos relatados por el quejoso, exponiendo que obra en virtud de superiores resoluciones dictadas por los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, é intentando demostrar que no hubo fraccionamiento en la venta de la hacienda de Bocas y que la ley núm. 34 no es mas que aclaración de la núm. 93. Visto el pedimento del C. gefe superior de hacienda del Estado llevando la voz fiscal; los documentos presentados en el juicio; el alegato del C. Lic. Arriaga y la sentencia del juez de Distrito, con todo lo demás que fué necesario ver y tener presente.

Considerando: que la enagenación de la

hacienda de Bocas á que se refiere el representante de los señores Farías y hermano, fué hecha en el concepto de estar exenta de pagar el derecho de traslación de dominio segun la ley núm. 93: que esta exención la pronunció el C. gobernador Escandon, autoridad encargada de ejecutar esa ley, en uso de sus facultades ordinarias y y teniendo ademas las extraordinarias que se le habian conferido: y que en tal virtud, los señores Farías y hermano adquirieron el derecho perfecto de libertad de pagar el impuesto expresado, de cuyo derecho no ha podido despues privarles ni la ley núm. 34, ni el acuerdo de la legislatura referidos, sin violar en sus personas las garantías que otorgan los artículos 14 y 27 de la Constitución de la república. Por los fundamentos espuestos y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve:

Primero; es de revocarse y se revoca la sentencia del juez de Distrito de San Luis Potosí fecha 20 de Setiembre último, por la cual declara que la justicia de la Union no protege ni ampara á los señores D. Francisco de P. Farías y hermano, contra el acuerdo de la II. Legislatura del Estado, en que mandó que pagaran el derecho de traslación de dominio por no considerar comprendida en las exenciones del decreto núm. 93 la compra que hicieron de la hacienda de Bocas.

Segundo; la justicia de la Union ampara y protege á los mencionados señores Farías y hermano contra el cobro que se les ha hecho por el C. administrador principal de rentas, como ejecutor, del derecho de traslación de dominio, por la compra del casco de la antigua hacienda de Bocas, restituyéndose las cosas al estado que tenían antes de dicha medida.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que forma-

ron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Octubre seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo, por el C. Cipriano Lopez, contra el presidente municipal de Pachuca, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El promotor fiscal dice: que es de conformidad con lo que el C. presidente municipal asegura en su informe fecha 21 del corriente sobre que los cuerpos municipales pueden ó no expedir patentes, imponer multas y dictar medidas que tiendan á la salubridad, seguridad y buen gobierno de las poblaciones que tienen bajo su custodia inmediata.

Para fundar el derecho que el C. presidente municipal ha tenido al dictar la orden que impide al C. Cipriano López ejercer su comercio en la tienda que tiene situada ha cinco meses cerca del tiro viejo de la mina que se conoce con el nombre del Carmen, cita los artículos 17 y 40 del bando de buen gobierno vigente, y añade además los inconvenientes que se originarán si se le permitiera continuar con su comercio. Mas como quiera que el mismo bando en su artículo 2º y que á la letra dice: “Los dueños de pulquerías y tinacales que están fuera de garita son responsables de

“cualquier desorden que se cometa por las reuniones que consientan en sus giros, y “la autoridad les hará efectiva una multa, “según sus proporciones, cuando no procuren evitar el desorden que se promueva, “sin perjuicio de las demás á que hubiere “lugar según las leyes” autoriza la existencia de pulquerías fuera de la ciudad, sujetas por supuesto á tales ó cuales restricciones y penas; el impedirlo al C. Cipriano Lopez por solo las razones de que puedan abrigarse en la referida tienda los malhechores, y el de haberla tenido abierta sin la autorización correspondiente, con otras que son demasiado infundadas, es atacar las garantías que otorga la Constitución general en su artículos 4º y 16, pues aun cuando el C. presidente municipal dice que no se exige al C. López el que se dedique á determinado comercio, sin embargo se le prohíbe hacerlo en lugar que por el mismo bando de buen gobierno le es permitido.

Para que no se crea, como se teme, que la justicia federal se arroga una jurisdicción extraña, me bastará suplicar al C. presidente municipal se recuerde los varios casos en que se ha negado el recurso de amparo á los que sin fundamento lo han interpuesto.

Estando, pues, conforme el recurso solicitado por el C. Cipriano López con el art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, soy de parecer que el juzgado debe conceder el amparo que se pide.

Pachuca, Agosto veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Macedonio Sanchez.*

Sentencia del C. Juez.

Vistos estos autos promovidos por el C. Cipriano López contra el presidente municipal de esta ciudad por violacion de las garantías consignadas en los artículos 4 y 16 de la carta fundamental, visto el escrito en que la parte agraviada refiere, que